

OPINIÓN

La gran minería y los territorios rurales



“
No podemos separar a la gran minería de las aceleradas transformaciones que impulsa en los lugares donde funciona”.

Matías Calderón Seguel,
doctor en Antropología
Departamento de
Ciencias Sociales
Universidad de Tarapacá

Desde pequeños nos hemos acostumbrado a frases como “Cobre, el sueldo de Chile”, “La vocación minera del Norte”, etc. Basta con realizar una evaluación rápida de la historia y del presente regional, o del rol clave que cumple la minería en las arcas fiscales, para, en una primera instancia, estar de acuerdo con ello. Sin embargo, su reconocimiento no nos debería conducir a tener una mirada acrítica. El crecimiento económico, por sí solo, no implica en sí mismo desarrollo territorial. La noción de desarrollo, asumida en serio, implica los múltiples aspectos de la vida y se enlaza con el bienestar, la equidad y la sostenibilidad socioambiental.

Por lo señalado, no podemos separar a la gran minería de las aceleradas transformaciones que impulsa en los lugares donde funciona y en sus cercanías. Sus áreas de afectación suelen corresponder a territorios que solemos denominar como rurales. En el caso de Tarapacá y otras regiones del norte, pequeños valles y quebradas, oasis, la precordillera y el altiplano. Es decir, espacios donde desde tiempos prehispánicos y hasta la actualidad se han practicado actividades agrícolas y ganaderas, lugares que a su vez concentran la disponibilidad de agua y dan forma a ecosistemas únicos en una de las zonas más áridas del mun-

do, el desierto de Atacama.

La importancia de lo anterior no es solo una cuestión de cuidado del patrimonio socioambiental regional. Se vincula directamente con el bienestar, la equidad y la sostenibilidad del territorio, es decir, con su desarrollo. En relación a ello, dos temas claves. Primero, la necesidad de un crecimiento que no implique daños ambientales que hagan inviable la práctica de otras actividades como la agricultura, la ganadería o el turismo. Y segundo, la importancia de que estas otras actividades puedan operar como alternativas reales de ingresos y que no sean relegadas a un plano accesorio. Ambas cuestiones requieren tanto de una población local organizada y empoderada, como de un Estado activo y eficiente, con políticas multisectoriales y recursos adecuados para su implementación.